

EL GIRO DE UNIDAS PODEMOS EN EL GOBIERNO: DE LA ESTRATEGIA RUPTURISTA A LA DEL CONSENSO.

El Gobierno de coalición apuesta por buscar grandes acuerdos políticos y sociales para afrontar la reconstrucción tras la pandemia • La derecha y ultraderecha política endurece su estrategia para derrocar al Gobierno de España con su principal punta de lanza en la Comunidad de Madrid • Descontento en las izquierdas por la constante aplicación de leyes restrictivas con las libertades durante el confinamiento

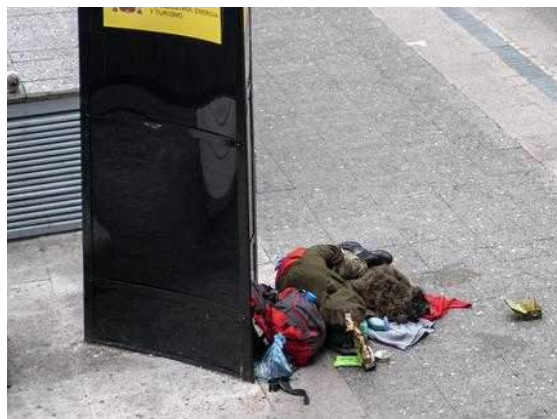


Sato Díaz | @JDSato
19/05/2020

Un poco de contexto

La pandemia de la incertidumbre. La propagación del coronavirus covid-19 por todo el mundo ha estado acompañada de crecientes incertezas que dejan un futuro oscuro, desconocido, del que es difícil intuir qué cambios sociales, políticos y económicos podrán venir en el corto, medio y largo plazo. Lo que, hasta el momento, podemos intuir es que la crisis económica que llega será brutal, con caídas espectaculares de los datos macroeconómicos en las últimas semanas. Las previsiones tanto de instituciones internacionales como de los diferentes gobiernos y bancos nacionales son de una dureza ingente.

Si algo hemos aprendido en las últimas décadas de consolidación y expansión de un modelo neoliberal globalizado es que los datos macroeconómicos no se reflejan, automáticamente, en mejoras sociales para las mayorías cuando son positivos, pero, por el contrario, suelen tener un efecto inmediato en las clases populares cuando son negativos. Por ello, la batalla política, en la praxis y en la teoría, que se abre es brutal. Lo estamos viendo a todos los niveles: geopolítico, europeo y, con sus tensiones propias y atávicas, en el caso español.



Una persona sin hogar en la zona de oficinas de Azca, Madrid
(Foto: Álvaro Minguito. El Salto Diario)

[El pasado mes de abril](#), la Rosa Luxemburg Stiftung publicaba el primer artículo de una serie que pretende analizar el recorrido del primer gobierno de coalición en el Estado español desde la II República. El experimento que unía a principios de enero a ministros socialistas y de Unidas Podemos en un mismo ejecutivo es motivo de atención y análisis desde fuera de las fronteras españolas, las izquierdas europeas miran con lupa en qué cristaliza este proyecto innovador. Sin embargo, durante el proceso de escritura del primer artículo durante el mes de marzo, quedó claro que el análisis versaría sobre la respuesta que este Gobierno era capaz de dar a una de las mayores crisis de la historia, la de la pandemia de covid-19. Y así ha de seguir siendo, pues este coronavirus lo ha alterado todo. ¿O no?

La Unión Europea y sus diferentes instituciones comunitarias se mostraban dubitativas y los estados miembros tomaban decisiones poco coordinadas entre sí.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, durante una conferencia de prensa en Ginebra (Suiza) el 11 de marzo de 2020 (Foto: OMS)

En aquel artículo, advertíamos de que, en aquellas primeras semanas de crisis sanitaria, el estado-nación, como unidad política, había sido la única capaz de dar una respuesta coherente al problema. Los mercados mundiales reaccionaban desmoronándose a la aparición del coronavirus, mostrándose inútiles como posible solución al problema y dejando a lo público como el punto de partida desde el que generar una respuesta sanitaria, política, económica y social al batacazo. Por otro lado, organismos supraestatales se mostraban lentos en la toma de decisiones y en llevarlas a la práctica. La OMS emitía unas guías de respuesta que no siempre eran tenidas en cuenta por los distintos gobiernos. La Unión Europea y sus diferentes instituciones comunitarias se mostraban dubitativas y los estados miembros tomaban decisiones poco coordinadas entre sí.

En el plano europeo, el debate entre estados y visiones políticas es uno de los mayores terrenos de disputa y del resultado de este dependerán las soluciones a la crisis de los próximos años. En España, la sociedad sigue cualquier decisión europea con interés, sabedora de que su futuro bienestar depende, en gran medida, de las decisiones que se adopten. El Gobierno español ha sido protagonista defendiendo algunas posiciones en el ámbito europeo, como la de la mutualización de la deuda, junto a Italia y Portugal principalmente. Finalmente, la idea fue rechazada por otros países, como Alemania o Países Bajos. Esto supuso un jarro de agua fría para el Gobierno, pero ayudó a centrar el momento real en el que estamos. Frente a unas primeras semanas de desconcierto en el que algunos creyeron que era el momento para impulsar grandes cambios sociales y políticos, nada nos puede hacer prever que el momento tenga algo de revolucionario, sin embargo, puede que los consensos políticos estén cambiando, aunque la polarización política crezca, con unas ultraderechas cada vez más organizadas a nivel internacional.

Las estructuras de poder se reafirman. Las derechas y ultraderechas y los grandes focos económicos ejercen una presión inmediata para que la solución no suponga una pérdida en el reparto de dividendos de las grandes corporaciones. Aun así, el Parlamento Europeo, el pasado 15 de mayo, emitía una declaración conjunta, aunque de carácter no vinculante, de los principales grupos y familias políticas advirtiéndoles de que las instituciones comunitarias han de tomar la delantera. Con un 80% de la cámara de Bruselas y Estrasburgo, otra vez el consenso, el Parlamento reclama a la Comisión un compromiso para la creación de un fondo común para la reconstrucción, y que este no esté basado en el endeudamiento infinito de los estados. La presión conjunta que pueden ejercer países como Italia, España y Portugal es esencial para frenar la influencia de los denominados países frugales y sus políticas en favor a la austeridad y contra una excesiva inversión pública.

Y es que la oposición de las derechas y ultraderechas españolas adquiere tintes de oposición venezolana, cabe recordar la estrecha relación que la derecha y ultraderecha españolas mantienen con los sectores más reaccionarios de América Latina.

En el ámbito español, la política también ha dado un giro relevante. Las primeras semanas, el Gobierno apretó con medidas de calado social, el llamado “escudo social”, ante una oposición que no fue muy beligerante ante el shock de la tragedia sanitaria. Los muertos se contaban por centenares y a diario, y las imágenes emitidas por la televisión reflejaban la extrema dureza del momento. Poco a poco, la derecha y la ultraderecha española ha ido cogiendo ritmo hasta desarrollar una oposición feroz. En España, las batallas políticas son viscerales y la derecha ha visto en el actual momento de crisis una

oportunidad para derrocar al Gobierno de coalición. El gen golpista de parte de la derecha española que todavía no se ha emancipado del franquismo 45 años después de la muerte del dictador, es siempre un factor a tener en cuenta. Sus tentáculos se extienden a través de unos poderosos medios de comunicación centralizados en Madrid.

Llamativas son las movilizaciones de centenares de manifestantes ultraderechistas en los últimos días en el Distrito de Salamanca de la ciudad de Madrid, uno de los de rentas más altas del país, de sociología rentista y, en algunos casos, de procedencia política vinculada a un pasado franquista. Es un sector minoritario en la población española, pero la relevancia que adquiere la ultraderecha en medios de comunicación españoles minoritarios les ofrece un altavoz que no se corresponde con la realidad proporcionalmente.



Protesta en Nuñez de Balboa el 14 de Mayo de 2020, Madrid
(Foto: Álvaro Minguito. El Salto Diario)

Algunas concentraciones minoritarias, al grito de “Sánchez, dimisión”, se han extendido por algunas ciudades. Entre los gritos favoritos de los manifestantes, reclaman “Libertad”, como si España viviera una dictadura, como si no se hubieran celebrado cinco elecciones en el 2019, dos de ellas generales, y el Gobierno no fuera fruto del pacto de la mayoría parlamentaria escogida por las urnas. Las caceroladas desde los balcones en protesta por la gestión del Gobierno se dan todos los días a las 21 horas, son sonoras, pero no masivas.

Y es que la oposición de las derechas y ultraderechas españolas adquiere tintes de oposición venezolana, cabe recordar la estrecha relación que la derecha y ultraderecha españolas mantienen con los sectores más reaccionarios de América Latina. De la tragedia del coronavirus quieren llevarse la caída del Gobierno de Pedro Sánchez. Estas protestas son minoritarias, hasta el momento, y, objetivamente, no tendrían relevancia si no fueran, constantemente, amplificadas por los poderosos medios de comunicación derechistas. Algunos líderes de opinión, a través de redes sociales, elucubran con que la presión social puede hacer caer el Gobierno de coalición, así tendrían las manos libres para una nueva convocatoria electoral, después de que la derecha perdiera dos elecciones generales en 2019. Más allá del ruido de las redes sociales y de estas manifestaciones ruidosas pero poco numerosas, las encuestas muestran un desgaste del Gobierno de coalición, pero no una victoria de las derechas.



Reunión Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España (Foto: Congreso)

Mientras el Gobierno, si en un primer momento pisaba el acelerador con las medidas de protección social, en las últimas semanas ha girado su estrategia hacia la consecución de grandes consensos de talante moderado. De este modo, mediante la recién creada Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, se pretende llegar a un gran pacto de país para afrontar la crisis

económica y social que llega. Desde el Gobierno, y especialmente desde Unidas Podemos, señalan algunos ejes de este consenso: blindaje constitucional de la Sanidad Pública, en concreto, ya que buena parte de ella ha sido desmantelada por privatizaciones y recortes en los últimos años, y de los servicios públicos, en general; apuesta por un sistema fiscal más progresivo; rediseño del modelo productivo apostando por una reindustrialización en el Estado frente a la tendencia de la deslocalización de los últimos lustros; importancia de Europa como parte de la solución, apostando por un gran consenso comunitario también basado en estos ejes, frente a las alternativas que apuestan por el nacionalismo excluyente.

Cabe recordar que no se puede hablar de España sin comentar el problema territorial. La gestión de la crisis está desgastando al Gobierno estatal, según señalan algunas encuestas, que ha apostado por una solución centralizada, todo el mando para el Gobierno, en especial en el Ministerio de Sanidad, mientras que las comunidades autónomas, especialmente las que están dirigidas por partidos nacionalistas periféricos o independentistas, reclaman mayor capacidad de gestión. También comunidades gobernadas por las derechas aprovechan los atriles de sus gobiernos para cargar contra Sánchez y sus ministros.

La gestión centralizada de la crisis está desgastando al Gobierno estatal (...) mientras que las comunidades autónomas, especialmente las que están dirigidas por partidos nacionalistas periféricos o independentistas, reclaman mayor capacidad de gestión.

Esto ha llevado a tensiones patentes en el Congreso, el Gobierno de coalición no tiene mayoría absoluta y se sustenta parlamentariamente gracias, principalmente, a los votos del Partido Nacionalista Vasco, de la izquierda independentista vasca de EH Bildu y las abstenciones de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya. Por otro lado, la Comunidad de Madrid, gobernada por el sector más extremista de la derecha del Partido Popular, se ha convertido en la punta de lanza de la oposición al Gobierno centralizada en la figura de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Al mismo tiempo, los movimientos sociales y sindicatos alternativos intentan influir en las decisiones gubernamentales para que la salida a la crisis sea en base ecologista y suponga el giro a la izquierda que, para muchos, debería suponer el que una fuerza política como Unidas Podemos forme parte del Consejo de Ministros. Ha habido campañas en redes sociales para exigir la protección de los servicios públicos, #PintoUnCorazónVerde,



Fotomontaje Campaña #PintoUnCorazónVerde (Foto: Plataforma Plan de Choque Social)

organizada por la Plataforma Plan de Choque Social que aglutina a centenares de colectivos sociales de todo el Estado, o para exigir un impuesto a las grandes fortunas o Tasa Covid, #QuePaguénLosRicos, organizada por el partido Anticapitalistas, recientemente escindido de Podemos, pero que obtuvo un apoyo notable en redes sociales. Cabe destacar que el confinamiento y la paralización de los encuentros sociales causa estragos en los movimientos que, hasta el momento, basaban su modelo de organización en el asamblearismo y su forma de acción en las manifestaciones y concentraciones públicas.

(...) el confinamiento y la paralización de los encuentros sociales causa estragos en los movimientos que, hasta el momento, basaban su modelo de organización en el asamblearismo y su forma de acción en las manifestaciones y concentraciones públicas.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, están incluidos en la estrategia del consenso y, conjuntamente con la patronal, forman parte de ese intento de gran pacto de país por la reconstrucción que echa a andar en el Congreso. Aquí llama la atención el que mientras la derecha y ultraderecha política, PP y Vox, continúan con sus intentos de acoso y derribo al Gobierno, la patronal, no sin tensiones internas, haya optado por la estrategia útil, formar parte del debate de un gran pacto de reconstrucción tras la crisis para

defender, en él, sus intereses. Esto también nos hace presagiar que, a pesar del cataclismo económico y social, y de la evidente lucha de clases e intereses que se desarrolla impregnada por el confinamiento, la salida será un gran pacto en búsqueda de consensos amplios, aparcando opciones rupturistas y drásticas en este momento.

Plan de Reconstrucción de Unidas Podemos: de la ruptura al consenso

Uno de los grandes retos de país que afronta España es este “Plan de Reconstrucción” al que hemos hecho referencia, un gran pacto político y social sobre el que sustentar la salida de esta crisis y fundamentar los ejes económicos y sociales del futuro. Que esto haya cogido a Unidas Podemos en el Gobierno es especialmente significativo. Tengamos en cuenta que las dos formaciones políticas que conforman esta coalición, más allá de distintas confluencias territoriales, son Podemos e Izquierda Unida. Ambas formaciones vienen defendiendo, en su pasado más reciente, documentos políticos de ruptura con el llamado Régimen del 78 surgido de la Transición de la dictadura a la democracia, y cuya correlación de fuerzas quedó escrita en la Constitución de 1978. Ahora, lejos de la ruptura, desde el Gobierno y con una crisis absoluta a nivel internacional, apuestan por el pacto, el consenso de país.

Como curiosidad, cabe destacar cómo llega la idea de estos pactos de reconstrucción a España. Algo, por otra parte, nada exótico, pues la reconstrucción ya se está ideando en la mayoría de los países, sea el ejecutivo del signo que sea, así como en el ámbito comunitario europeo. Sin embargo, España tiene su propia idiosincrasia política, y la visceralidad es una de sus señas de identidad, como hemos dicho. Es por ello que, ante la crisis que venía y ante la novedad de que Unidas Podemos, una izquierda más a la izquierda del PSOE, estaba por primera vez desde los años 30 en el Gobierno, desde determinados círculos mediáticos y “opinadores” progresistas moderados se empezó a lanzar la idea, a finales del mes de marzo, de unos nuevos Pactos de la Moncloa (importante este significante). Mientras, desde la izquierda radical se instigaba a que Unidas Podemos, desde el Gobierno, apretara más en medidas rupturistas y no se veía con buenos ojos la idea del pacto y, desde las derechas y ultraderechas políticas y mediáticas, se intentaba borrar la posibilidad del acuerdo: su objetivo es derrocar al Gobierno y sacar a Unidas Podemos de la Moncloa.

El presidente Sánchez recogió el guante en una de sus múltiples comparecencias televisadas durante esta crisis. Habría unos “Pactos de la Moncloa”, un gran pacto de país político y social que aglutinaría tres ejes: el político, con el amplio espectro actual de fuerzas políticas representadas en el Congreso; el social, con la incorporación de la sociedad civil organizada, sindicatos y patronal; y el institucional, en el que se incorporarían las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La negativa del PP de formar parte de una gran escenificación, que podría desembocar en consolidar la figura del actual presidente socialista como el gran estadista del momento, llegó pronto. Por ello, los acuerdos se irán dando en materias concretas y se debatirán en el Congreso.

En lo social, el pasado 11 de mayo, Gobierno, sindicatos y patronal firmaban un acuerdo conjunto para prolongar los ERTE, las medidas de empleo para evitar los despidos por causa de la pandemia, hasta el mes de julio. En lo político, se constituía en el Congreso la Comisión para la



Firmantes de los Pactos de la Moncloa, el 27 de julio de 1977 (Foto: Archivo)

Reconstrucción dos días después. Cabe destacar que el PP se había opuesto a que el acuerdo entre partidos se diera en Moncloa, sede del Ejecutivo, para que se celebrara en la sede del Legislativo, robándole foco al presidente Sánchez.

En este contexto, Unidas Podemos había de justificar, desde el Gobierno, su estrategia hacia un gran pacto. En esto, cobra una especial relevancia el primer significante,

Pactos de la Moncloa, luego sustituido por Reconstrucción. En los Pactos de la Moncloa, que se firmaron en octubre de 1977, en plena Transición de la dictadura a la democracia, participó el Partido Comunista, legalizado unos meses antes. A través de esos pactos, el PCE volvió a la política de alto nivel en España tras las oscuras décadas de dictadura, de clandestinidad y exilio, y se convirtió en un vector importante para la escritura de la Constitución del 78, en la que se reconocen derechos sociales homologables a cualquier constitución europea del momento. Los Pactos de la Moncloa, que incluyeron a patronal y a los principales sindicatos, sirvieron para adoptar una política de consenso que contuviera la gran inflación económica derivada de la Crisis del Petróleo internacional del 1973. A cambio, los sindicatos y las izquierdas hubieron de aceptar una rebaja en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los Pactos de la Moncloa, que incluyeron a patronal y a los principales sindicatos, sirvieron para adoptar una política de consenso que contuviera la gran inflación económica derivada de la Crisis del Petróleo internacional del 1973.

Si el PCE, en aquel momento, fue una de las patas sobre las que se sustentó el gran acuerdo constitucional, en estos momentos Unidas Podemos (coalición en la que se integra Izquierda Unida, a su vez coalición en la que está el PCE) reivindica la tradición pactista comunista del 78 para el gran acuerdo que se pretende. Si el PCE, entonces, dejó de lado tentativas revolucionarias en favor del paso de la dictadura a la democracia, en estos momentos Unidas Podemos se hace mayor y abandona las proclamas de ruptura con el Régimen del 78 que se evidenciaron en el movimiento 15M de hace nueve años, origen sociológico de Podemos y, a su vez, motivo de una evolución de IU hacia una posición más combativa con el PSOE. Ahora toca consenso, y Unidas Podemos va a echar el resto en los Pactos de la Reconstrucción.

El pasado 13 de mayo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, responsable del área social y de la Agenda 2030 del Gobierno, comparecía en el Senado. "Esto ya no es un programa de dos partidos; es un programa de país, con medidas que parten de amplios consensos sociales, y para su desarrollo en la reconstrucción tendemos la mano a todos", pronunció, en referencia a las políticas que intenta desarrollar el Gobierno durante la pandemia. Ahora no se trata de desarrollar un programa de un gobierno progresista durante una legislatura cualquiera, ahora se considera que ante este momento histórico el programa ha de ser de país, un gran pacto "que no deje a nadie atrás".



El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, interviniendo en el Senado (Foto: Emilio Naranjo)

Hasta ahora, algunas de las medidas que se han desvelado que Unidas Podemos planteará en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso son un nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas y un plan para que impere la gestión pública en las residencias de personas mayores, que han sido el epicentro de muertes por covid-19 y que muchas de ellas están gestionadas por empresas privadas. Habrá más medidas que se irán anunciando en las próximas semanas. Sobre el nuevo impuesto,

desde Unidas Podemos aseguran que “muchas empresas y familias van a necesitar el apoyo de la sociedad, a través de las políticas públicas, para no quedarse atrás” y “además, se necesitará invertir para reconstruir partes de nuestro tejido productivo, para no descuidar la investigación que puede salvar vidas, y para reforzar servicios públicos como la sanidad, la atención social o las residencias donde cuidamos a nuestros mayores”. El nuevo impuesto que propone Unidas Podemos, que será debatido junto a otras propuestas de otros partidos en comisión, propone que quede exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros; un 2% para patrimonios netos a partir de 1.000.000 de euros, un 2,5% a partir de 10.000.000 de euros, 3% a partir de 50.000.000 y 3,5% a partir de 100.000.000. De momento, el PSOE no ve con buenos ojos este nuevo impuesto a los más ricos.

La plurinacionalidad y las comunidades autónomas

En la Constitución española de 1978 se reconoce la existencia de “nacionalidades históricas” en el Estado español. La fórmula territorial del Estado está basada en las comunidades autónomas, un modelo semi-federal, basado en que algunas competencias están transferidas a las comunidades. No es un modelo federal, en el que las distintas federaciones, con soberanía propia, deciden federarse, sino un reparto de las competencias políticas en distintas materias: educación, sanidad, servicios sociales, medio ambiente, la gestión de algunos impuestos... Por otro lado, algunas de estas comunidades autónomas tienen reivindicaciones nacionalistas desde hace siglos, a estas se hace referencia en la Constitución como “nacionalidades históricas”, tras un arduo debate constitucional en 1978 en el que se fijó que solo hay una nación indisoluble, la nación española.

*Hay peculiaridades nacionales en otros territorios del Estado
y esto genera constantes fricciones políticas.*



Pancartas a favor de la libertad de expresión y de la libertad de los presos políticos y exiliados en el Palau de la Generalitat de Catalunya (Foto: RTVE.es)

Esto hace que constantemente haya una tensión territorial en la política española, un problema que dista mucho de estar solucionado. Así Euskadi (País Vasco), junto, en menor medida, con Navarra tienen un componente sociológico de matriz nacionalista e independentista. También Catalunya, cuyo conflicto está especialmente vivo tras

los sucesos de 2017 en el que se celebró la consulta del 1-O con una feroz respuesta represiva policial y judicial del Estado español. Sus principales dirigentes, de los partidos JxCat y ERC, están en prisión, tras la sentencia del Tribunal Supremo de octubre del año pasado, o en el exilio en diferentes estados europeos. También en Galicia hay algunas reivindicaciones de carácter nacional que se manifiestan en el partido Bloque Nacionalista Gallego. Hay peculiaridades nacionales en otros territorios del Estado y esto genera constantes fricciones políticas.

Esto hace que la política española tenga que ver siempre con un sistema de contrapesos territoriales que se manifiesta en el papel que tienen las comunidades autónomas en la gestión de cogobierno con el Gobierno de España y en la presencia de estas fuerzas políticas en el Congreso. En el momento actual, la relevancia es mayor, pues la mayoría de la investidura como presidente del



Banner Campaña Teruel existe (Foto: teruelexiste.info)

Gobierno de Sánchez del pasado mes de enero no sería posible sin el apoyo, por acción u omisión mediante la abstención, de fuerzas políticas como ERC, independentista catalana, PNV, nacionalista vasca, EH Bildu, independentista vasca, BNG, independentista gallega, Coalición Canaria, nacionalista canaria... Además, Teruel Existe, una formación política nacida de un movimiento ciudadano que se basa en la reclamación de derechos para los territorios rurales olvidados en el desarrollo económico de las últimas décadas, tiene un diputado con una importancia aritmética en el actual Congreso de los Diputados.

El Gobierno asumió un protagonismo de gran calado, con largas intervenciones presidenciales en televisión todas las semanas, en alguna ocasión, más de una, y con un reguero de ruedas de prensa, hasta tres al día, con la aparición de distintos ministros, especialmente el de Sanidad, Salvador Illa.

La gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno ha sido, como hemos dicho, centralizada hasta el momento, ubicando el mando único en el Gobierno, especialmente en el Ministerio de Sanidad. Con la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo, algo que se ha ido renovando cada 15 días en el Congreso, el Gobierno asumió más competencias de las que suele gestionar, dotando de una mayor relevancia al Ministerio de Sanidad, un ministerio que, hasta ahora, tenía pocas competencias, pues los servicios sanitarios están transferidos a la gestión de las comunidades autónomas.

Desde el primer momento, las voces críticas con esta decisión centralista, en un país de tendencia federal y con conflictos nacionales, no tardaron en llegar, pero el momento de shock por la emergencia sanitaria las dejó en un segundo plano. El Gobierno asumió un protagonismo de gran calado, con largas intervenciones presidenciales en televisión todas las semanas, en alguna ocasión, más de una, y con un reguero de ruedas de prensa, hasta tres al día, con la aparición de distintos ministros, especialmente el de Sanidad, Salvador Illa. Además, el comité técnico de crisis comparecía todos los días. Si el principal protagonista del mismo es el epidemiólogo Fernando Simón, en las ruedas de prensa aparecía también el Jefe del Estado Mayor de Defensa, con uniforme militar, y cargos de alto rango de la Policía Nacional y la Guardia Civil, también uniformados. Las críticas desde las izquierdas y de partidos nacionalistas no se hicieron esperar. Cabe destacar que algunas comunidades autónomas tienen transferidas algunas competencias policiales con cuerpos de seguridad propios.

Estos conflictos se acentuaron mucho, además, en la semana del 4 de mayo, cuando el Gobierno tenía que solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma 15 días más. La gestión excesivamente centralizada del Gobierno había hecho olvidar el diálogo con las fuerzas

nacionalistas periféricas e independentistas con representación parlamentaria necesaria para mantener una mayoría. El Gobierno había actuado como si contara con mayoría absoluta. La tensión política subió de temperatura, pues hasta última hora, cuando el partido derechista Ciudadanos, inscrito en el grupo liberal europeo, decidió votar a favor. Tras este toque de atención, en los últimos días, el Gobierno ha hecho más fluida su relación con los grupos minoritarios de la cámara y se prevé que puedan llegar a acuerdos para prolongar el estado de alarma un mes más.

En este sentido, el Gobierno está apostando en el proceso de desescalada hacia una nueva normalidad tras el confinamiento por una “cogobernanza” con las comunidades autónomas. Así, la desescalada se está produciendo por fases y de forma asimétrica. En cada fase, dependiendo de criterios médicos tales como el número de camas en hospitales y UCI o el índice nuevos contagios de covid-19, los ciudadanos van recuperando derechos de movilidad y la actividad económica se va reactivando. En estas decisiones, siempre supervisadas en último momento por el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas tienen mucho que decir. También en la gestión de la desescalada en sus propios territorios.

El caso de la Comunidad de Madrid es especialmente significativo. La presidenta de la región, Díaz Ayuso, forma parte del ala más derechista del PP, apoyada, hasta el momento, por el presidente del partido, Pablo Casado. Ayuso, con su estilo bronco y beligerante, se ha convertido en la principal punta de lanza de la oposición de derechas y ultraderechas al Ejecutivo central, siguiendo la estela de la Fundación FAES, presidida por el que fuera presidente del Gobierno, José María Aznar. Madrid es la zona más afectada por la pandemia del Estado español y, además, los numerosos recortes en Sanidad durante los últimos años de los gobiernos de la derecha han hecho que la su sistema sanitario esté altamente perjudicada por unas decisiones de carácter neoliberal.

Así, Madrid sigue en la “fase 0”, lo que implica que las reuniones estén prohibidas y la apertura de terrazas de bares también, el comercio solo puede abrir con unas medidas muy restrictivas, así como la movilidad de la ciudadanía sigue siendo muy reducida. Ayuso ha hecho de la confrontación con el Gobierno de Sánchez, al que tilda de “socialcomunista”, su principal manera de desviar la atención para tapar sus errores en la gestión de la crisis. Con un lenguaje muy amenazante, ha sugerido incluso que la confrontación social aumentará, dando por bueno que los ciudadanos del Distrito de Salamanca estén saltándose las normas del confinamiento en manifestaciones contra el Gobierno español, movilizaciones con tintes del golpismo venezolano, como hemos comentado, vinculadas a la ultraderecha de vínculos franquistas, pero que siguen siendo, aunque muy ruidosas y amplificadas por importantes medios de comunicación, minoritarias.



Gran Vía de Madrid durante marzo de 2020 (Foto: Álvaro Minguito. El Salto Diario)

Mientras que otras comunidades autónomas, como Castilla y León, Murcia, Galicia o Andalucía, también gobernadas por las derechas, como la madrileña, muestran más sintonía con el Gobierno central en lo referente a la gestión de la crisis derivada de la pandemia, desde Madrid el nivel de

confrontación asciende por momentos, acusando al Gobierno de querer perjudicar a la región en la desescalada. La tensión interna en el seno del gobierno autonómico madrileño, conformado por una coalición de PP y Ciudadanos, es cada vez más palpable, lo que hace merodear la idea de una ruptura de la alianza que podría llevar, en unos meses, a una moción de censura a Ayuso y a un entendimiento de PSOE y Ciudadanos en Madrid.



Pedro Sánchez e Inés Arrimadas en diciembre de 2019 (Foto: Getty Images)

Esto es relevante desde el punto de vista político porque supondría un cambio de alianzas de Ciudadanos, hasta ahora casi siempre entendiéndose con PP y Vox, y podría girar hacia el centro en búsqueda de puntos de encuentro con el PSOE. Esto podría hacer que las mayorías en el Congreso fluctuaran. El Gobierno, como ya ocurrió la semana del 4 de mayo, podría contar con los 10 votos de los diputados de Ciudadanos para aprobar los presupuestos del 2021, unos presupuestos que serán de emergencia para responder a la crisis generada por el

coronavirus. Esto podría influir en una menor influencia de Unidas Podemos en las políticas económicas gubernamentales. Hasta el momento, estos movimientos son elucubraciones, claro, pero la capacidad del PSOE de virar de un discurso izquierdista a otro moderado nunca deja de sorprender.

La tensión interna en el seno del gobierno autonómico madrileño, conformado por una coalición de PP y Ciudadanos, es cada vez más palpable, lo que hace merodear la idea de una ruptura de la alianza que podría llevar, en unos meses, a una moción de censura a Ayuso y a un entendimiento de PSOE y Ciudadanos en Madrid.

Libertades públicas y derechos civiles

Nos referíamos a la constante presencia en ruedas de prensa de cargos uniformados policiales militares. Esta estrategia comunicativa gubernamental cambió hace unas semanas, cuando dejaron de aparecer responsables de los cuerpos de seguridad en las comparecencias televisadas. Aun así, el descontento de colectivos sociales con la excesiva militarización del lenguaje gubernamental durante la crisis, refiriéndose a la respuesta a la emergencia sanitaria como una guerra contra el coronavirus, es evidente.

Las redes sociales han reproducido infinidad de actuaciones policiales, que se pueden calificar de abusos, durante las semanas de confinamiento, algo que contrasta con claridad con el comportamiento de los agentes durante las protestas ultraderechistas de los últimos días, en las que los manifestantes se saltan las medidas de seguridad y las normas sin que haya una reacción acorde por los agentes. La alta presencia de elementos ultraderechistas en las filas de los cuerpos policiales y en el Ejército es una realidad estudiada en diferentes publicaciones. También se nota un incremento del sentido de voto durante las elecciones en colegios electorales cercanos a cuarteles o

residencias de policías o guardias civiles. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad tienen un componente sociológico bastante más escorado a la derecha que la sociedad en general.

A esto hay que añadirle el perfil del ministro del Interior, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, el cual no ha dudado en llevar a cabo medidas contundentes en materia migratoria que han levantado críticas de colectivos defensores de los Derechos Humanos. También ha sido templado a la hora de criticar comportamientos policiales poco ejemplares. La orientación política del ministro del Interior no gusta en Unidas Podemos y es uno de los elementos de fricción en el seno del Gobierno de coalición. Desde la izquierda se le tacha de ser muy conservador, lo cual le hace chocar con los ministros de Iglesias.



Fernando Grande-Marlaska en rueda de prensa 29.04.20
(Foto: Moncloa)

Además, los policías están usando para castigar a las personas que se saltan la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la “ley mordaza”. La ley mordaza se aprobó en el Congreso en 2015 por el PP, partido del Gobierno en aquel momento, y consta de unas normas muy restrictivas en materia de libertades civiles y derechos ciudadanos, como la libertad de reunión, manifestación o la misma libertad de expresión. El contexto en el que se aprobó esta normativa estaba inmerso en un periodo de gran movilización social, el ciclo posterior al 15M, cuando los efectos económicos de la anterior crisis económica, que se inició en 2008, estaban causando estragos en amplios segmentos sociales. De esta manera, se pretendía controlar la protesta ciudadana ante la alta conflictividad social, cuando la desigualdad económica empeoraba por momentos. Con la ley mordaza también se preparó el Estado para posibles respuestas ante una creciente movilización del independentismo en Catalunya.

Que el Gobierno de coalición progresista esté usando la ley mordaza durante el estado de alarma de esta pandemia no deja de ser contradictorio. Tanto PSOE como Unidas Podemos siempre se han mostrado en contra de la norma, como muchas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, y en su propio programa de gobierno conjunto estaba el sustituirla por otra legislación. Tanto PSOE como los partidos de Unidas Podemos recurrieron esta ley ante el Tribunal Constitucional cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la puso en marcha, aunque todavía no hay sentencia.

*Que el Gobierno de coalición progresista
esté usando la ley mordaza durante
el estado de alarma de esta pandemia
no deja de ser contradictorio.*



Candidatura Anti Represión Región de Murcia (Foto: Kaosenlared)

En este sentido, cabe citar que el secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, quien destaca en su trayectoria como abogado defensor de los Derechos Humanos, se ha mostrado en distintas ocasiones en contra de la aplicación de la ley mordaza durante este estado de

alarma. “Aplicar una ley que penaliza más duramente habiendo otras posibilidades previas no nos parece adecuado ni a nosotros, ni a la Abogacía del Estado, ni al Defensor del Pueblo”, recuerda. Las críticas por otras izquierdas parlamentarias del Congreso, que no están representadas en el Gobierno, también son constantes en este sentido. Y más cuando este mes de marzo, antes del estallido de la pandemia de covid-19, diferentes grupos en el Congreso empezaban a trabajar por la derogación de la ley mordaza.

En plena pandemia, el debate ideológico toma protagonismo en todos los aspectos de la política. Esto se ve a nivel global, también europeo y con sus especificidades propias, en el español. El Gobierno de coalición se enfrenta a una gran campaña de desprestigio por parte de derechas y ultraderechas que buscan derrocarlo. La reconstrucción económica y social es el principal motor político del momento. Y ante este nuevo contexto, en un mundo en constante cambio impulsado por la pandemia, Unidas Podemos,

desde el Consejo de Ministros, busca forjar grandes consensos ciudadanos para el nuevo ciclo político. El pacto toma posiciones frente a las opciones más rupturistas, en un momento histórico que puede suponer, precisamente, una ruptura con lo anterior.

El Gobierno de coalición se enfrenta a una gran campaña de desprestigio por parte de derechas y ultraderechas que buscan derrocarlo. La reconstrucción económica y social es el principal motor político del momento.
